



OF. ORD.: (N° digital y fecha de la resolución en costado inferior izquierdo)

ANT.: 1) ORD. N° 2178, de fecha 26 de agosto de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que requiere pronunciamiento en el marco de lo dispuesto en el literal i) del artículo 3° de la LOSMA, respecto al proyecto “Valles de Rauco”, de titularidad de Inmobiliaria Los Alarces SpA. 2) ORD. N° 26, de 05 de enero de 2023, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que reitera la solicitud de pronunciamiento en el marco en el marco de lo dispuesto en el literal i) del artículo 3° de la LOSMA, respecto al proyecto “Valles de Rauco”, de titularidad de Inmobiliaria Los Alarces SpA.

MAT.: Evacúa Informe.

Santiago,

**DE : JUAN CRISTÓBAL MOSCOSO FARIÁS
DIRECTOR EJECUTIVO (S)
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**

**A : EMANUEL IBARRA SOTO
FISCAL
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE**

Mediante el Ord. del ANT. 1). la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, “SMA”) solicitó a la Dirección Regional del Maule del Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, “SEA Maule”), emitir un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes expuestos, el proyecto denominado “Valles de Rauco” (en adelante, el “Proyecto”), de titularidad de Inmobiliaria Los Alarces SpA (en adelante, el “Titular”) requiere ingresar de forma obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, “SEIA”), conforme a lo dispuesto en el artículo 3° literal i) de la Ley N° 20.417 (en adelante, “LOSMA”), en relación con los artículos 8 y 10 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en adelante, “Ley N° 19.300”) y el artículo 3 del Decreto Supremo N° 40, de 2012, que aprueba el Reglamento del SEIA (en adelante, “RSEIA”).

Con posterioridad al requerimiento referido precedentemente, y mediante el Ord. del ANT.2), la SMA ha solicitado un pronunciamiento a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (“Dirección Ejecutiva del SEA” o la “Dirección Ejecutiva”),



conforme a lo dispuesto en el artículo 3°, literal i) de la LOSMA, en los mismos términos del ANT.1)

Cabe hacer presente que en la solicitud anteriormente individualizada la SMA concluye que las actividades realizadas por el Titular se enmarcarían en la tipología de ingreso al SEIA establecida en el literal g) del artículo 10 de la Ley 19.300, específicamente en el subliteral g.1.1 del artículo 3 del RSEIA, solicitando específicamente un “*pronunciamiento respecto a la hipótesis de elusión levantada por la SMA*”.

A efectos de dar cumplimiento a lo solicitado por la SMA, se hace presente que, en virtud de los principios administrativos de eficiencia, eficacia y economía procedimental, el Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA” o el “Servicio”) emitirá este único pronunciamiento, por medio del cual se da respuesta a todos los oficios individualizados en el ANT.

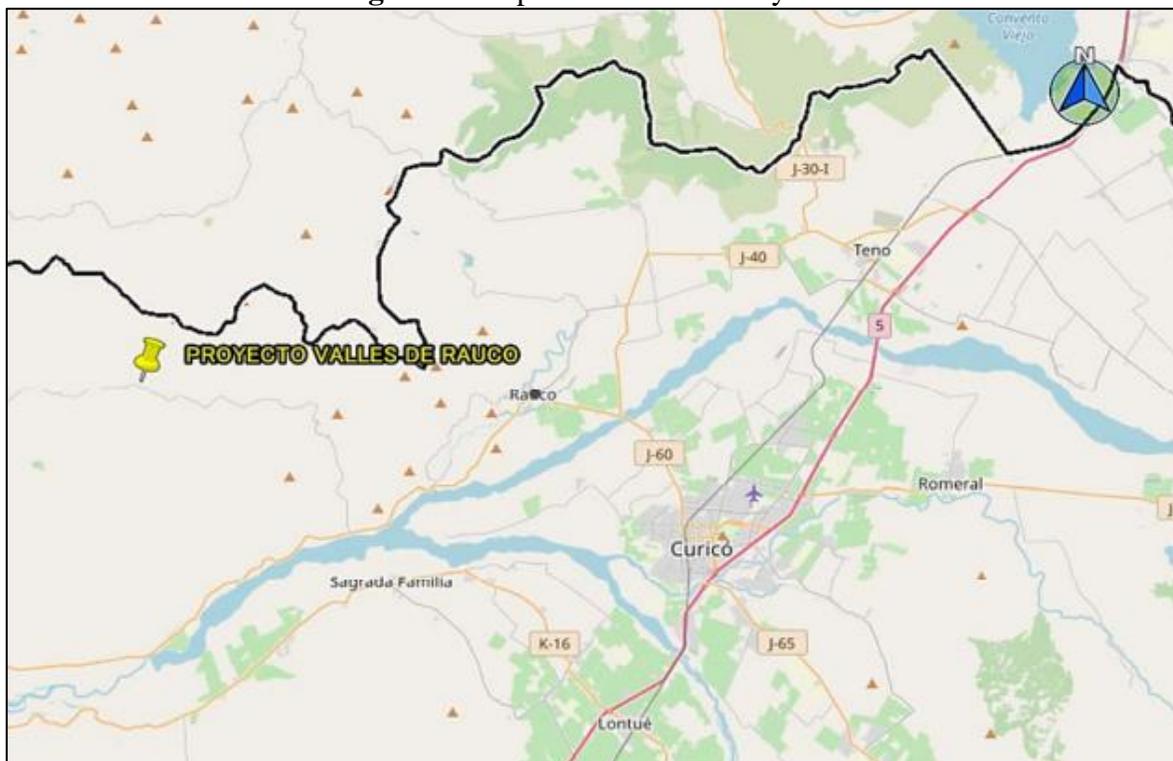
En este contexto, y en relación con su solicitud, es menester indicar que la Dirección Ejecutiva ha tenido a la vista los siguientes antecedentes:

- i. La Resolución Exenta N° 1271, de fecha 03 de agosto de 2022, de la SMA (en adelante, “Res. Ex. N° 1271/2022”), que da inicio a procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA del proyecto “*Valles de Rauco*”.
- ii. Of. Ord. del ANT.1) y ANT.2).
- iii. Informe Técnico de Fiscalización Ambiental DFZ-2021-2001-VII-SRCA, junto con sus anexos (en adelante, el “IFA”).
- iv. El escrito de fecha 21 de septiembre de 2022, mediante la cual el Titular evacúa el traslado conferido en la Res. Ex. N° 1271/2022.
- v. El escrito del denunciante de fecha 02 de diciembre de 2022, mediante el cual solicita se curso progresivo al procedimiento.
- vi. La Resolución Exenta N° 102, de fecha 19 de enero de 2023 (en adelante, la “Res. Ex. N° 102”), de la SMA, mediante la cual se fijó un término probatorio de diez días hábiles.
- vii. El escrito de fecha 07 de febrero de 2023 mediante el cual el Titular acompaña documentos en el marco del periodo probatorio dispuesto por la Res. Ex. N° 102.
- viii. El escrito de fecha 07 de febrero de 2023 mediante el cual el denunciante acompaña documentos en el marco del periodo probatorio dispuesto por la Res. Ex. N° 102.
- ix. La Resolución Exenta N° 588, de 31 de marzo de 2023, de la SMA, la cual tiene presente lo que indica.
- x. Los demás antecedentes que constan en el expediente administrativo sobre requerimiento de ingreso, Rol REQ-011-2022.

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO “VALLES DE RAUCO”

El proyecto “Valles de Rauco” está ubicado en la comuna de Rauco, provincia de Curicó, región del Maule.

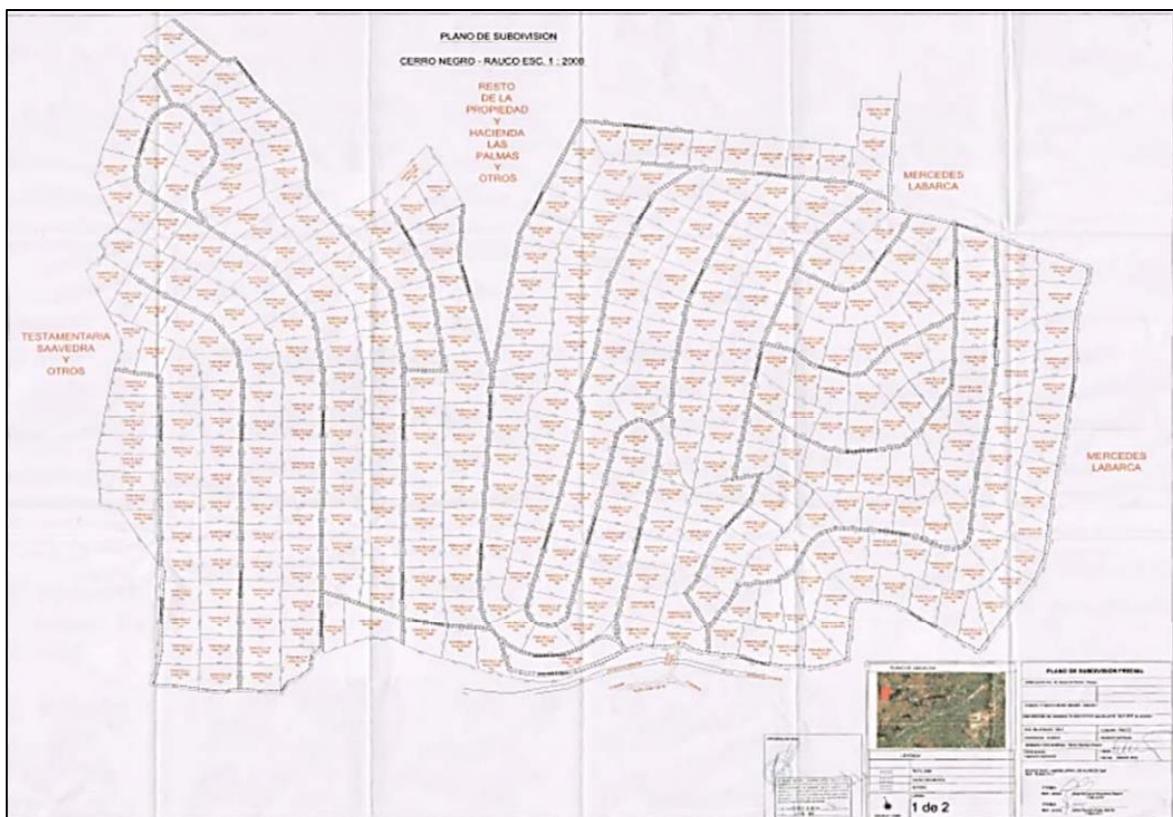
Figura 1: Emplazamiento del Proyecto



Fuente: IFA

El Proyecto se emplaza en el inmueble denominado Fundo Cerro Negro, el cual se encuentra a 36 kilómetros de Curicó. Consiste en la venta de 398 parcelas de entre 0,5 y 0,8 hectáreas en la Comuna de Rauco, y posee una superficie aproximada de 100 hectáreas.

Figura 2: Layout al Proyecto



Fuente: IFA

2. HECHOS CONSTATADOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL AL PROYECTO “VALLES DE RAUCO”

2.1. Denuncias formuladas

Con fecha 16 de diciembre de 2020, la SMA recibió una denuncia ciudadana en contra de Inmobiliaria Los Alarces SpA, por la ejecución de su proyecto inmobiliario “Valles de Rauco”, donde se indicó que, pese al resguardo del carácter agrícola, ganadero o forestal del terreno, el Titular estaría ejecutando un conjunto habitacional, sin haber mediado el procedimiento de cambio de uso de suelo, regulado en los incisos 3° y 4° del artículo 55 la LGUC.

Luego, con fecha 15 de septiembre de 2021, el denunciante presentó un escrito complementario a la SMA, entregando nuevos antecedentes del caso y solicitando la dictación de las siguientes medidas provisionales: la detención de funcionamiento de las instalaciones; el sellado de aparatos y equipos; la clausura temporal, parcial o total de las instalaciones; y medidas de corrección, seguridad y control que impidan que se continúe produciendo el riesgo o el daño que se generaría..

Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2021, el denunciante acompañó nuevos documentos al procedimiento e hizo presente distintas consideraciones

2.2. Fiscalización ambiental y requerimiento de ingreso

La denuncia y antecedentes antes referidos fueron ingresados al sistema de registro de la SMA con el ID 93-VII-2020 y dieron origen a una investigación por parte de este organismo, sistematizada en el expediente de fiscalización ambiental DFZ-2021-2001-VII-SRCA.

En el marco de este expediente, se realizó una actividad de inspección ambiental con fecha 04 de enero de 2022. Adicionalmente, se tuvieron a la vista imágenes satelitales del proyecto, junto con los antecedentes remitidos por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule, y aquellos presentados por el denunciante. De lo anterior, fue posible concluir lo siguiente:

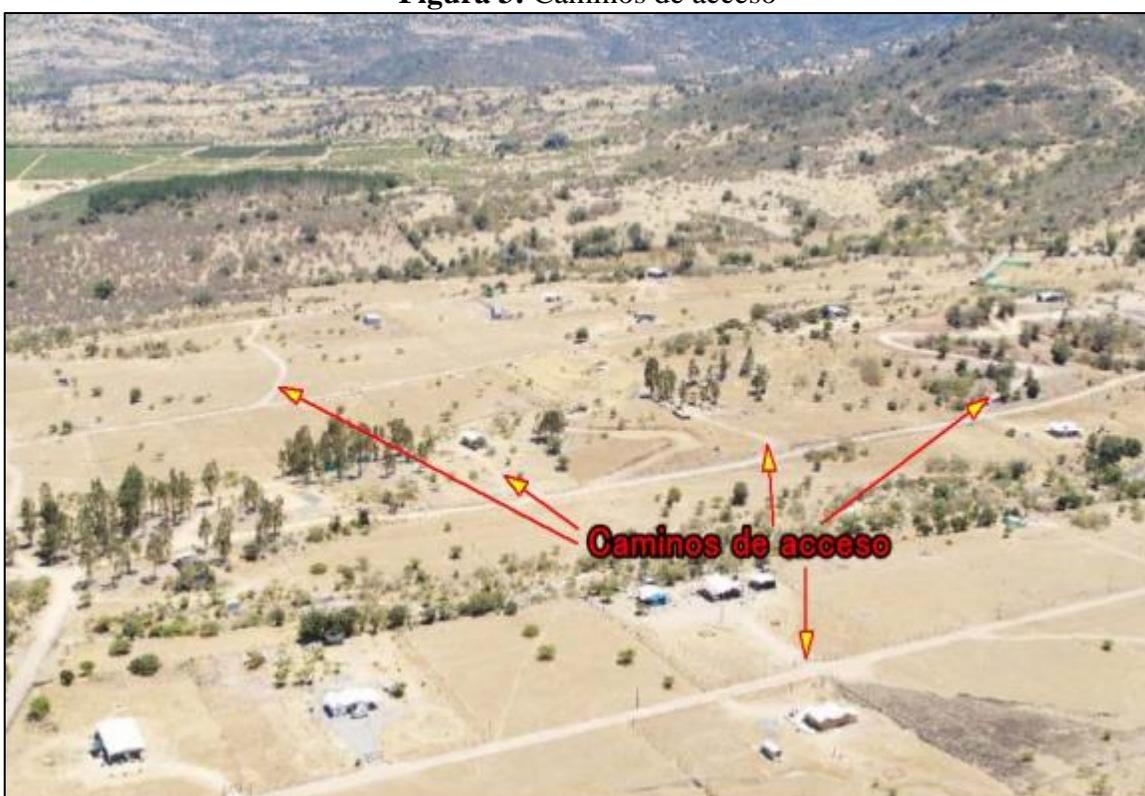
- a) El proyecto se ha identificado como “*Valles de Rauco*” y está ubicado en el Fundo “*Cerro Negro*”, Rol de Avalúo Fiscal N°165- 2, comuna de Rauco, provincia de Curicó, región del Maule.
- b) A partir del Certificado de Ruralidad N°1192 de la Ilustre Municipalidad de Rauco, se concluye que el Fundo “*Cerro Negro*” se encuentra fuera del radio urbano de la comuna, es decir, en un sector rural¹.
- c) El Titular del proyecto es Inmobiliaria Los Alarces SpA. Según la inscripción de Fojas 200 N°1277 y su anotación marginal del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Licantén, del año 2018, el dominio del Fundo “*Cerro Negro*”, también pertenece a dicha inmobiliaria.
- d) El predio donde se ejecuta el proyecto abarca una superficie aproximada de 1.100 hectáreas.
- e) El proyecto consiste en la venta de las 398 parcelas en las que se ha subdividido dicho predio, de entre 0,5 y 0,8 hectáreas cada una.
- f) El proyecto de subdivisión fue aprobado por la Dirección Regional del SAG de la región del Maule, mediante el Certificado N°34, Código 07301, de 25 de enero de 2019, que certifica que la solicitud de subdivisión del predio denominado Fundo

¹ En dicho certificado se estableció expresamente que “*la propiedad denominada como Fundo Cerro Negro del Sector El Parrón, Rol de Avalúo 165-2 de la Comuna de Rauco, se encuentra fuera del radio urbano de la comuna, es decir, está ubicado en un sector rural*”.

“Cerro Negro”, Rol de Avalúo N°165-2, de la comuna de Rauco, cumple con la normativa vigente para los predios rústicos.

- g) Según consta en el Oficio N°230 de 22 de febrero de 2021, del SAG de la región del Maule, no se habrían efectuado otras solicitudes de autorización en el contexto del artículo 55 de la LGUC.
- h) Según indica la SMA, el proyecto ha sido promocionado en diversos medios y páginas web: <https://vallesderauco.cl/>; <https://garciaacorretajes.cl/>; <https://curico.doplim.cl/>; <https://youtube.com/>.
- i) A partir de las imágenes aéreas obtenidas de un vuelo en dron realizado por funcionarios de la SMA sobre el lugar de emplazamiento del proyecto, se pudo verificar la existencia de una red de caminos circunscritos al área del proyecto, de viviendas y faenas, de caminos de acceso a los predios existentes y proyectados, además del despeje y nivelación de terrenos y la ejecución de trabajos mediante maquinaria pesada.

Figura 3: Caminos de acceso



Fuente: IFA

- j) A partir de imágenes satelitales de la Plataforma Electrónica Geoespacial de la SMA, se realizó un análisis multitemporal para establecer la existencia anterior de caminos en el lugar, en tanto el titular alegó que su proyecto no contemplaba la habilitación de caminos, solo la mantención y mejoramiento de otros preexistentes.
- k) Realizado el análisis, se pudo constatar que en el área de emplazamiento del proyecto se realizó una implementación progresiva de caminos desde el año 2018 en adelante, y que la proyección de los caminos es coincidente con la disposición de los sitios, conforme a la información aportada por el titular en su presentación de fecha 22 de abril de 2021, correspondiente a un plano en formato KML del proyecto. La extensión y disposición de estos caminos permitirían establecer una proyección urbana del proyecto. A lo anterior, se suman los distintos trabajos y obras constatados en terreno, ejecutados con maquinaria pesada, tales como escarpe y nivelación de terrenos.

Figura 4: Plano del proyecto en KML



Fuente: IFA

- l) En virtud de lo informado por el SAG de la región del Maule, en su ORD. N°2/2021 de 05 de enero de 2021, en su visita inspectiva de fecha 22 de diciembre de 2020, se constató la corta de árboles nativos para la proyección de servidumbres de tránsito, en específico, litres, boldos, peumos, maitenes y matorrales propios del sector.

Con relación a lo anterior, la CONAF presentó, con fecha 03 de agosto de 2021, una denuncia en contra de Inmobiliaria Los Alarces SpA ante el Juzgado de Policía Local de Rauco, por la corta no autorizada de bosque nativo del tipo forestal esclerófilo (por ejemplo, de boldo y quillay) en el Fundo “Cerro Negro”, no existiendo un Plan de Manejo aprobado para dicho predio.

- m) En el ORD. N°1314 de 15 de noviembre de 2021, remitido a la SMA por parte de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule, dicha entidad concluyó que existen elementos indiciarios suficientes para concluir que la parcelación “Valles de Rauco” corresponde a un desarrollo inmobiliario de carácter habitacional, ajeno al destino agrícola del terreno.
- n) Por otra parte, según consta en el ORD. N°981 de 30 de agosto de 2021, de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule, dicha entidad presentó una denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Rauco en contra del titular, por infracción a las disposiciones de la LGUC; al Decreto N°47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que “Fija Nuevo Texto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones” (en adelante, “OGUC”); y al Decreto Ley N°3516 de 1980, del Ministerio de Agricultura.
- o) En el Informe Técnico N°12/2021 de fecha 15 de marzo de 2021, de la Ilustre Municipalidad de Rauco, se da cuenta de los hechos constatados en tres visitas inspectivas de fechas 19 de enero, 11 de febrero y 03 de marzo, todas del año 2021, realizadas por funcionarios municipales al sector de emplazamiento del proyecto. Precisamente, dicho organismo verificó que:
- Existen 16 parcelas con construcciones de madera, adobe y concreto, de las cuales una mitad presenta uso agrícola y la otra mitad presenta un uso habitacional.
 - El loteo pretende un uso habitacional, lo que es apreciable desde el momento de ingresar al sector, evidenciando la presencia de condiciones de intervención de caminos y parcelación.

- La apertura de caminos interiores y privados está afectando la morfología del sector, así como a los componentes flora y fauna.
 - Las edificaciones en los lotes no cuentan con permiso de la Dirección de Obras Municipales, sin que se hayan recibido ingresos de solicitudes de regularización de ningún tipo.
- p) Según consta en el Memorándum N° 52, de fecha 14 de junio de 2021, de la Ilustre Municipalidad de Rauco, dicha entidad edilicia presentó una denuncia ante el Juzgado de Policía Local de Rauco en contra del titular, solicitando la aplicación de una multa en conformidad al artículo 2° del Decreto N°3516 de 1980, del Ministerio de Agricultura.
- q) En base a información entregada por el propio Titular con fecha 22 de abril de 2021, se tuvo que, a dicha fecha, habían sido enajenadas 237 parcelas mediante escritura pública de contrato de compraventa, incluyéndose en todas y cada una de ellas expresamente la cláusula de prohibición de cambio de destino de uso suelo de conformidad al artículo 55 y 56 de la LGUC; y que se contempla la enajenación de otras 70 parcelas, mientras que otras 100 no serían enajenadas en razón de su topografía y características.
- r) De la Plataforma de Infraestructura de Datos Espaciales de la SMA, se pudo verificar que el proyecto no se encuentra dentro o cercano a áreas protegidas por el Estado, así como tampoco de humedales urbanos.

En base a los hechos constatados previamente, la SMA dictó la Res. Ex N° 1271, de 03 de agosto de 2022, mediante la cual inició un procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA a este Proyecto en base al subliteral g.1.1 del artículo 3 del RSEIA, confiriendo traslado a su Titular por un plazo de 15 días hábiles. En lo que interesa para efectos de este informe, la SMA señaló lo siguiente:

- a) Que, en primer lugar, la SMA señala que, *“pese a que el Titular haya utilizado el mecanismo del D.L. N°3516, para la subdivisión de predios rústicos (rurales), en los hechos, nos encontramos frente a un proyecto de subdivisión donde se implementan aquellas obras de urbanización contenidas en el artículo 134 LGUC, por ser insuficientes las ya existentes, y por lo tanto, la parcelación cumple con los requisitos para ser tratada como un loteo (artículo 65 de la LGUC), que conlleva un desarrollo urbano”*. La SMA señala que la evidencia proporcionada por la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el informe del Municipio de Rauco dan cuenta de una serie de acciones del Titular que buscan que las parcelas se configuren actualmente como un desarrollo urbano, con las correspondientes obras de edificación y urbanización, para habilitar su uso con fines habitacionales, sin sujetarse a los fines dispuestos por la normativa del D.L. N°3516.
- b) Que, en segundo lugar, la SMA señala que verificó *“la existencia de obras de edificación (viviendas, portón de acceso y alumbrado eléctrico, entre otras) y de urbanización (implementación de caminos, de redes de electricidad, de obras de defensa y servicio del terreno, entre otras)”*.
- c) Que, en tercer lugar, la SMA que el fin de Proyecto es habitacional, pues a partir del sobrevuelo en dron del proyecto, la SMA verificó la existencia de casas-habitaciones en el predio. Además, la publicidad del Proyecto se enfoca en promocionar un lugar para vivir y descansar, aludiendo a conceptos tales como *“hogar”*, no asociado a una actividad agrícola. Del mismo modo, las características del proyecto *“permiten presumir fundadamente que éste se encuentra destinado a la vivienda, poseyendo características propias de un condominio”*. En el mismo sentido, la SMA indica que *“la subdivisión del predio se da en 398 parcelas y de ellas, como mínimo, 307 serán enajenadas con fines habitacionales, siendo posible inferir que en cada una de éstas se eruirá una vivienda particular”*.
- d) Por todo lo anterior, la SMA concluye indicando que *“resulta aplicable a la especie el literal g) del artículo 10 de la Ley N°19.300, desarrollado en el artículo 3° del RSEIA”*.

- e) Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de medidas provisionales realizada por el denunciante, mediante escrito de fecha 15 de septiembre de 2021, la SMA estableció que no se cumplían los presupuestos para acceder a estas.

Posteriormente, con fecha 21 de septiembre de 2022, el Titular presentó un escrito evacuando el traslado conferido en la Res. Ex. N° 1271/2022, mediante el cual solicitó a la SMA que se compruebe que *“no se cumple con los requisitos de ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental”*.

- a) El Titular señala que el Proyecto sólo contempla la construcción de un portón de acceso y reparación de la entrada al predio. En concreto, indica que se busca *“reacondicionar los caminos preexistentes, y ejecutar otros interiores emplazados en diversos lotes resultantes de la parcelación, para lo cual se constituirán las correspondientes servidumbres de tránsito conforme la enajenación de los lotes en las respectivas escrituras de compraventa”*².
- b) Que, en el mismo sentido, el Titular señala que el proyecto no contempla la instalación de una red de agua potable ni de electricidad, y que los sistemas de tratamiento de aguas servidas serán de responsabilidad de los propietarios de los lotes. Señala que tampoco se proyecta la instalación de una red de distribución de energía eléctrica aérea o soterrada, de empalmes³.
- c) En este sentido, el Titular señala que *“han sido enajenadas hasta la fecha, 237 parcelas mediante escritura pública de contrato de compraventa incluyéndose en todas y cada una de ellas expresamente la cláusula de prohibición de cambio de destino de uso suelo de conformidad al artículo 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones”*⁴.
- d) Por otra parte, en lo que respecta al Informe de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, el Titular indica que dicho organismo sólo constató elementos indiciarios de que podría infringirse lo establecido en el inciso 1° del art. 55 de la LGUC, cuestión que sería distinta a lo establecido por la SMA al momento de dictar la Res. Ex. N° 1271/2022, donde se estableció que se verificó la existencia de obras de edificación y de urbanización. En suma, el Titular indica que *“lo señalado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo es diferente a lo constatado por esta Superintendencia, por cuanto la Seremi de Vivienda y urbanismo se refiere solo a elementos indiciarios, debiendo ser materia de prueba en este procedimiento”*⁵.
- e) Que, en lo que respecta a la solicitud de subdivisión efectuada al SAG, el Titular destaca que dicho organismo señaló que el proyecto cumple con las normas de predios rústicos, de manera que, al momento de enajenar los predios, aquellas transacciones se realizaron *“sin cambio de uso de suelo, respetando la normativa vigente, sin hacer referencia en ningún instrumento, a la venta de viviendas urbanizadas, puesto que, bajo ningún respecto se trató de un loteo urbano”*⁶.
- f) Que, en lo que respecta a las obras de urbanización, el Titular señaló que no ha realizado obras de dicha naturaleza, puesto que *“únicamente instó por someter a revisión y aprobación, la subdivisión de su predio rústico, para lo cual presentó un plano de subdivisión predial, que fue debidamente aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, por considerar que se cumplían los supuestos exigidos por las normas del Decreto Ley N° 3516”*⁷. En este sentido, el Titular indica que únicamente ha realizado la habilitación de caminos preexistentes, los que no son de acceso público, sino que se trata de caminos emplazados por las servidumbres de accesos a los predios, es decir, se trata de caminos privados y particulares, para el uso exclusivo de los compradores de los retazos de terreno.

² Escrito de fecha 21 de septiembre de 2022, p. 2.

³ Ibid., pp. 2-3.

⁴ Ibid., p. 3.

⁵ Ibid., p. 5.

⁶ Ibid., p. 6.

⁷ Ibid., p. 6.

El Titular señala que lo anterior se refuerza si se atiende a la sentencia dictada por el Juzgado de Policía Local de Rauco en causa Rol N° 127-2021, de fecha 19 de julio de 2022, la cual se encuentra firme y ejecutoriada, en la cual se indicó: *“En cuanto a que la denunciada debía, según la denunciante, haber obtenido el cambio de destino de los predios subdivididos, toda vez que se construyeron segundas viviendas o de veraneo, esta magistrado, concordando con lo alegado por la denunciada y según lo razonado en la letra anterior, estima inequívocamente que dicha obligación recae sobre cada uno de los propietarios de dichas viviendas y no sobre la empresa que subdividió y vendió los predios, según se ha dicho, sin construcciones, sin urbanización y con la prohibición de cambio de destino, por lo que una vez más la denunciante confunde a los sujetos pasivos, debiendo haber dirigido sus denuncias en contra de cada uno de los propietarios en forma individual y no en contra de la empresa denunciada”*⁸.

- g) Así entonces, en base a los argumentos previos, el Titular señala que *“jamás ha existido el ánimo de eludir el sistema por parte de mi representada, por cuanto no ha llevado a cabo ejecución de obras que permitan concluir que estamos ante una urbanización, y así se resolvió jurisdiccionalmente cuando la situación se denunció ante el Juzgado de Policía Local competente”*⁹.
- h) Establecido lo anterior, el Titular indica que la Res. Ex. N° 1271, carece de motivación pues no existen obras de urbanización. En este sentido, el Titular reitera que *“existe una sentencia firme y ejecutoriada del Juzgado de Policía Local de Rauco que necesariamente debió ser considerada en la Resolución Exenta N° 1271 (...) “Lamentablemente, la Resolución Exenta N°1271 en ninguna de las piezas del expediente administrativo que lo sustentan contienen el más mínimo ejercicio de ponderación sobre estas circunstancias”*. Según señala el Titular, *“[d]e haberse ponderado los antecedentes del procedimiento judicial tramitado ante el Juzgado de Policía Local probablemente no se habría dado inicio al procedimiento de requerimiento de ingreso al sistema de Evaluación Ambiental”*¹⁰.
- i) Por otra parte, indica que la Res. Ex. N° 1271 transgrede el principio de imparcialidad, sin indicar de que forma específicamente se estaría afectando dicho principio¹¹.
- j) Concluye el Titular indicando que la Res. Ex. N° 1271 infringe el principio de confianza legítima pues *“lo que ha realizado mi representada es la subdivisión de predios rústicos (rurales) bajo el DL N°3516 y no conlleva a un desarrollo urbano. Por lo tanto, ha actuado bajo la estabilidad de una normativa”*¹².
- k) En suma, por los argumentos previos, el Titular concluye su presentación solicitando a la SMA que determine que no se cumple con los requisitos de ingreso al SEIA. Asimismo, el Titular solicitó la apertura de un término probatorio.

2.3. Proyectos sometidos a evaluación ambiental y/o consulta de pertinencia

Revisada la plataforma e-SEIA, fue posible constatar que el proyecto “Valles de Rauco” no posee ninguna Resolución de Calificación Ambiental asociada, y tampoco ha sido sometido al SEIA.

Por su parte, de la revisión de la plataforma e-Pertinencias, fue posible constatar que tampoco se han presentado consultas de pertinencia de ingreso al SEIA respecto de este proyecto.

3. PERTINENCIA DE SOMETER A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EL PROYECTO “VALLES DE RAUCO”

Considerando los antecedentes anteriormente expuestos en la Sección 2 del presente Informe, la SMA ha solicitado al SEA emitir un pronunciamiento sobre la pertinencia de

⁸ Ibid., p. 7.

⁹ Ibid., p. 8.

¹⁰ Ibid., p. 10.

¹¹ Ibid., p. 14.

¹² Ibid., p. 14.

ingreso al SEIA del Proyecto, de conformidad a lo dispuesto por el subliteral g.1.1. del artículo 3 del RSEIA y el artículo 10 literal g) de la Ley N°19.300. En relación con ello, se hace presente que la Ley N°19.300, en su artículo 8°, dispone que:

“Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley”.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley N° 19.300 señala que, deberán someterse al SEIA *“los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases”*. A continuación, se examinará en la eventual configuración del literal consultado por la SMA a esta Dirección Ejecutiva.

3.1. Análisis de la tipología del artículo 3 literal g.1.1 del RSEIA

En relación al literal g) del artículo 10 y artículo 3 del RSEIA, cabe tener presente que el subliteral g.1.1 del artículo 3 del RSEIA, indica lo siguiente:

“g) Proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente de conformidad a lo establecido en el párrafo 1° bis del Título II de la Ley. Se entenderá por planes a los instrumentos de planificación territorial.

g.1. Se entenderá por proyectos de desarrollo urbano aquellos que contemplen obras de edificación y/o urbanización cuyo destino sea habitacional, industrial y/o de equipamiento, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

g.1.1. Conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a 80 viviendas, o tratándose de vivienda social, vivienda progresiva o infraestructura sanitaria, a ciento sesenta (160) viviendas”.

De forma previa al análisis sobre la pertinencia de ingreso del Proyecto al SEIA, se previene que el presente pronunciamiento supone una labor interpretativa de diversas disposiciones de naturaleza urbanística aplicables al caso examinado. En tal contexto, debe tenerse en cuenta que este Servicio no detenta competencias asociadas a una esfera distinta a la ambiental, por lo cual, el análisis que se desarrollará en las secciones sucesivas y las conclusiones que se desprendan de éste, tienen un carácter preliminar, sujeto a lo que en definitiva determinen los órganos competentes en la materia.

Establecido lo anterior, en relación al literal g) del artículo 3 del RSEIA, es necesario destacar que el Proyecto se emplaza en la comuna de Rauco, en la región del Maule. Ahora bien, el área en donde se emplaza el Proyecto corresponde a una zona que no se encuentra regulada por alguno de los Instrumentos de Planificación Territorial (“IPT”) indicados en el artículo 2.1.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (“OGUC”). Por consiguiente, corresponde analizar si, atendida sus características, el Proyecto se subsume en alguno de los subliterales dispuestos por la causal de ingreso al SEIA en análisis.

El **literal g.1.** señala que se entenderán por *“proyectos de desarrollo urbano”* aquellos que contemplen obras de edificación y/o urbanización cuyo destino sea habitacional, industrial y/o de equipamiento, presentando alguna de las características singularizadas en los subliterales g.1.1, g.1.2 y g.1.3 del artículo 3 del Reglamento del SEIA. Por consiguiente, el literal exige la concurrencia de una determinada obra –edificación y/o urbanización–, por una parte, y una finalidad específica –habitacional, industrial y/o equipamiento–, por otra.

En cuanto a las obras, el precepto refiere, en primer término, a las *“edificaciones”*. Se observa que aquel vocablo no ha sido definido expresamente por el legislador, de modo que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República¹³ (“CGR”), aquel debe ser entendido según el uso general del mismo, por así disponerlo el artículo 20 del Código Civil¹⁴. Así, la Real Academia de la Lengua Española (“RAE”) define este concepto como *“edificio o conjunto de edificios”*. En armonía con la definición transcrita, el artículo

¹³ Contraloría General de la República, Dictamen N° 7.634, de 15 de febrero de 2007.

¹⁴ Dicha norma señala expresamente: *“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”*.

1.1.2. de la OGUC define el concepto de “edificio” como “*toda edificación compuesta por uno o más recintos, cualquiera sea su destino*”. A su turno, la misma disposición reglamentaria define el vocablo “recinto” como aquel “*espacio abierto o cerrado destinado a una o varias actividades*”.

Por otra parte, en cuanto al concepto de “urbanización”, el artículo 1.1.2 de la OGUC define el vocablo “urbanizar” como “*ejecutar, ampliar o modificar **cualquiera de las obras señaladas en el artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el terreno propio, en el espacio público o en el contemplado con tal destino en el respectivo Instrumento de Planificación Territorial o en un proyecto de loteo (...)***” (Énfasis añadido). Luego, cabe tener presente que, el inciso primero del artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC”), señala que “[p]ara urbanizar un terreno, el propietario del mismo deberá ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servicio del terreno”. Consecuentemente, al tenor de las normas citadas, para que se verifique la acción de urbanizar, basta la ejecución de cualquiera de las obras enunciadas en el artículo 134 de la LGUC, según lo ha señalado expresamente el Minvu mediante su Ord. N° 0083/2022, cuya copia se adjunta al presente Informe.

Establecido lo anterior, cabe señalar que, conforme lo informó el SAG de la Región de Maule, el Proyecto en análisis se inició en base a la normativa de subdivisión de predios rústicos¹⁵, encontrándose en consecuencia sujeto a las restricciones y prohibiciones establecidas en los artículos 55 y 56 de la LGUC¹⁶, cuestión que reconoce expresamente el propio Titular en su escrito evacuando traslado¹⁷.

Pues bien, en vista de los antecedentes analizados, es posible señalar respecto al **subliteral g.1.1 del artículo 3 del Reglamento del SEIA** consultado por la SMA, que el Proyecto posee un destino habitacional. En efecto, el propio Titular señaló, mediante Carta enviada a la SMA con fecha 22 de abril de 2021, que “*Inmobiliaria Los Alerces SpA, tiene interés en desarrollar un proyecto inmobiliario de tipo **agro-residencial**, en el predio denominado Fundo Cerro Negro, denominado Valles de Rauco (en adelante el “Proyecto”), con el fin de aprovechar las condiciones de belleza natural del referido predio*”¹⁸ (Énfasis añadido). En el mismo sentido, la SMA constató que en diversos medios publicitarios el Titular promocionó la venta de los predios utilizando expresiones que darían cuenta de la finalidad habitacional del proyecto, como: “*casa parcela*”, “*buena navegación en internet*”, “*conoce tu nuevo hogar*”, “*portón de acceso, factibilidad de agua y luz*”¹⁹.

Enseguida, cabe tener presente que la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Rauco, mediante el Oficio N° 12, de fecha 15 de marzo de 2021, indica que realizó tres visitas inspectivas al predio, donde constató que “*el loteo pretende un uso habitacional, lo que es apreciable desde el momento de ingresar al sector, evidenciando la presencia de condiciones de intervención de caminos y parcelación. El aumento de edificaciones destinadas a segundas viviendas (de veraneo) es inminente (...)*”.

Por otra parte, la Seremi Minvu de la Región del Maule constató, en el Informe N° 73, de fecha 26 de agosto de 2021, que en el predio habían construcciones provisorias, junto con maquinaria pesada e implementaciones que “*hacen pensar se trate de Instalaciones destinadas a albergar instalaciones de faenas y servicios a los trabajadores*”.

¹⁵ En efecto, en el certificado N° 34 del SAG de Maule, de fecha 25 de enero de 2019, se indicó: “*Conforme al plano de parcelación y demás antecedentes tenidos a la vista, cumple con la normativa vigente para los predios rústicos, no significando el presente certificado autorización de cambio de uso de suelos.*”

¹⁶ Dichas prohibiciones y restricciones dicen relación con que, producto de las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, no se originen “*nuevos núcleos urbanos*”, lo que se produce cuando estas subdivisiones tienen por objetivo “*levantar poblaciones destinadas a materializar proyectos habitacionales, ya sean éstos del sector público o del sector privado*” (Contraloría General de la República, Dictamen N° 14871, de 19 de abril de 2002).

¹⁷ Escrito de evacúa traslado, de fecha 21 de septiembre de 2022, p. 3, donde el Titular señala que en todos los contratos de compraventa ha incluido “*la cláusula de prohibición de cambio de destino de uso suelo de conformidad al artículo 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.*”

¹⁸ Carta S/N, de 22 de abril de 2021, p. 4 (Anexo 2 del IFA).

¹⁹ Res. Ex. N° 1271/2022, de 03 de agosto de 2022, pp. 3 – 4.

Figura 3: Obras constatadas por la Seremi Minvu 1



Fuente: Informe N° 73, Seremi Minvu de la Región del Maule

Figura 4: Obras constatadas por la Seremi Minvu 2



Fuente: Informe N° 73, Seremi Minvu de la Región del Maule

De ahí que dicha entidad concluyó que *“existen elementos indiciarios suficiente para concluir que la parcelación “Valles de Rauco” corresponde a un desarrollo inmobiliario de carácter habitacional”*. Asimismo, dicho informe agrega que si en cada lote (del total de 398) se albergara una familia de cuatro personas *“se está frente a la eventual conformación de (...) una población estimada de 1.600 habitantes”*. Dicho lo anterior, a partir de los antecedentes de este expediente administrativo, cabe concluir que ni la Seremi Minvu ni tampoco el SAG han recibido la solicitud de autorización para realizar construcciones conforme a lo establecido en los incisos 3° y 4° del artículo 55 de la LGUC²⁰, por lo cual el Seremi Minvu concluye en su informe que el presente proyecto constituye una infracción a

²⁰ Estas normas señalan:

“Con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado, la autorización que otorgue la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura requerirá del informe previo favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este informe señalará el grado de urbanización que deberá tener esa división predial, conforme a lo que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Igualmente, las construcciones industriales, de infraestructura, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los límites urbanos, requerirán, previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan. El mismo informe será exigible a las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado”.

lo establecido en el artículo 55 de la LGUC y a lo dispuesto en el artículo 2° del DL N° 3.516²¹.

Asimismo, cabe señalar que, a pesar que el Titular señala que su proyecto no contempla realizar obras de urbanización, existen algunos indicios que indican lo contrario. Por ejemplo, conforme lo constató la SMA, en un medio publicitario en que se promocionaba el proyecto se estableció: “*pronta pavimentación*”²². Del mismo modo, el Informe N° 73, dictado por la Seremi Minvu del Maule, establece que “*existen obras de habilitación de vialidad que contempla evacuación de aguas lluvia tipo alcantarillas destinadas a conducir el flujo que acarrearán las quebradas existentes en el lugar*”²³. Así entonces, cabe reiterar lo establecido en el artículo 1.1.2 de la OGUC define el vocablo “urbanizar” como “*ejecutar, ampliar o modificar cualquiera de las obras señaladas en el artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones*”.

Dicho lo anterior, cabe tener presente el principio de supremacía de la realidad conforme al cual la Administración Pública “*debe orientar la labor interpretativa del Derecho Administrativo y la búsqueda de soluciones que armonicen y uniformen el actuar de las entidades por medio de las cuales el Estado ejerce sus funciones*”²⁴. Por consiguiente, lo que ocurre en la práctica debe prevalecer por sobre lo establecido en antecedentes formales, con el objeto de resguardar la categoría del SEIA como instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo y de tercer orden, que permita una protección ambiental efectiva.

Ahora bien, a pesar de lo previamente señalado, se advierte que no es posible asegurar con certeza que el Proyecto contemple la construcción de viviendas en un número, formas ni tiempos determinados, ni menos por un mismo Titular de Proyecto, pues tal decisión queda de cargo de los futuros o actuales propietarios de los predios subdivididos, sin que tampoco sea posible presumir que en cada predio se construirá una vivienda -superando así el umbral de 80 viviendas- considerando que el SEIA es un procedimiento predictivo de impactos ambientales, de modo que no cabe determinar la pertinencia de ingreso de un proyecto en base a suposiciones. En este sentido, la sentencia de la Jueza de Policía Local de Rauco, señaló que “*las viviendas que se han ido levantando en dichos predios, tal como consta de lo descrito en las visitas inspectivas del DOM, son de responsabilidad de los moradores de cada una de ellas y no de la empresa inmobiliaria, la que, como consta de las escrituras públicas de compraventa, de sus respectivas inscripciones y de la declaración de los testigos, solo se limitó a vender los predios, sin urbanización y con la prohibición de cambio de destino*” (Énfasis añadido)²⁵.

En este contexto, seguidamente corresponde determinar si el proyecto constituye un “*conjunto habitacional*”. Al respecto, y en opinión de esta Dirección Ejecutiva, el Proyecto no se enmarca o subsume en la figura antes referida en atención a las siguientes consideraciones:

- i. De acuerdo con lo establecido en el DL N° 3.516, los predios rústicos -inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal ubicados en áreas rurales- podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que los lotes resultantes tengan una superficie predial mínima de 0,5 ha, los cuales quedarán sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos que establecen los artículos 55 y 56 de la LGUC, esto es, deberán mantener su aptitud agrícola, ganadera o forestal, sin perjuicio de poder acogerse a las excepciones consagradas en el artículo 55 de la LGUC.
- ii. El artículo 55 de la LGUC corresponde a un precepto de carácter prohibitivo y de excepción, el cual establece el estatuto general de aplicación en suelo rural. El inciso primero de dicha disposición establece que no se encuentra permitido en el área rural

²¹ El mencionado Informe N° 73, concluye: “*De igual manera, dado su carácter habitacional y urbano, constituye una infracción a lo establecido en el artículo 2° del DL 3.516 de 1980, que prohíbe la destinación de los predios resultantes de una división rural a fines urbanos o habitacionales*” (Énfasis añadido).

²² Res. Ex. N° 1271/2022, de 03 de agosto de 2022, p. 3.

²³ Informe N° 73, Seremi Minvu de la Región del Maule.

²⁴ En este sentido, dictámenes N°: E33624, de 04 de septiembre de 2020; E160316, de 29 de noviembre de 2021; 208631, de 29 de abril de 2022; E293556, de 30 de diciembre de 2022, entre otros.

²⁵ Sentencia Rol N° 127-2021, de fecha 19 de julio de 2022, considerando 6°, letra ii).

“*abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones*”. Al respecto, la norma prohíbe subdividir un predio rural para formar poblaciones. Para dichos efectos debe tenerse en consideración que “*población*” -término que no se encuentra definido en la OGUC-, en su sentido natural y obvio, de acuerdo a la RAE, significa “*conjunto de personas que habitan en un determinado lugar*”, mientras que la preposición “*para*” denota el fin o término a que se encamina una acción. En virtud de lo anterior, la norma prohíbe, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el inciso tercero del artículo 55 de la LGUC, subdividir un predio rural con el propósito de que un conjunto de personas habite en ese determinado lugar. En tal sentido se pronunció el Minvu, mediante el Ord. N° 0083/2022, ya referido. De la misma forma, la norma no permite, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el inciso cuarto del artículo 55 de la LGUC, levantar construcciones, esto es, la ejecución de obras de edificación o de urbanización, conforme a la definición contenida en el artículo 1.1.2 de la OGUC.

- iii. En relación con lo anterior, y de acuerdo con los antecedentes que constan en el procedimiento administrativo substanciado por la SMA, el Proyecto comprende la división del suelo en área rural, cuyos predios resultantes serán vendidos o comercializados con el objeto de que los futuros propietarios puedan habitar en ellos. Lo anterior, implica una modificación del destino agrícola, ganadero o forestal -a la cual quedan sujetos originalmente los predios resultantes de una división amparada en el régimen establecido en el DL N° 3.516- a una habitacional. Por tanto, para ajustarse a la normativa vigente, el Proyecto necesariamente debe enmarcarse en alguna de las hipótesis excepcionales del artículo 55 de la LGUC.
- iv. En tal contexto normativo, corresponde determinar si el proyecto en cuestión corresponde a un “*conjunto habitacional*” o no, según lo que se indicará a continuación.

En primer lugar, al no contemplar edificaciones, el Proyecto no corresponde a un “*conjunto habitacional*”. Al respecto, cabe aclarar que desde un punto de vista ambiental no es posible presuponer la ejecución futura de obras, partes o acciones que, conforme a lo señalado por el respectivo titular, no son parte del proyecto y respecto de las cuales no existe información suficiente para desarrollar una adecuada evaluación de impacto ambiental (en términos de los artículos 36 y 48 RSEIA, falta información relevante para comprender y evaluar adecuadamente un proyecto o actividad, lo que constituye una causal de término anticipado del procedimiento de evaluación ambiental). En este sentido, es menester señalar que en el procedimiento administrativo ante la SMA no constan antecedentes que permitan determinar con certeza el número y características constructivas de cada edificación futura -cuestión que determinarán los futuros y actuales propietarios-, circunstancia que contraviene la normativa general que rige el SEIA. En efecto, en este caso no sería posible desarrollar adecuadamente un procedimiento de evaluación ambiental que cumpla con su finalidad, cual es precisamente determinar si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. En términos generales, la evaluación de impacto ambiental en el marco del SEIA se basa en el análisis de las partes, obras y acciones de un proyecto o actividad a ejecutarse y cómo éstas alteran los componentes del medio ambiente. De no precisar adecuadamente la información correspondiente a la descripción de proyecto, la consecuente predicción y evaluación de los impactos se tornará inoficiosa.

- v. Sin perjuicio del ejercicio de las competencias específicas que detentan los órganos competentes en la materia, señalados en el artículo 55 de la LGUC, a partir del análisis preliminar realizado por este Servicio, no resulta posible visualizar que el Proyecto se enmarque en alguna de hipótesis excepcionales contempladas en la aludida disposición legal y pudiere, consecuentemente, obtener la autorización correspondiente.

De esta forma, a pesar de que el presente Proyecto tiene una finalidad habitacional, resulta forzoso concluir que el Proyecto informado no puede enmarcarse en el subliteral g.1.1 del artículo 3 del Reglamento del SEIA, motivo por el cual esta tipología no se configura,

determinando, en consecuencia, que no procede disponer el ingreso de este proyecto de forma obligatoria al SEIA.

Sin embargo, a pesar que este proyecto no contempla la construcción de edificaciones, y aun cuando no supera los umbrales del literal g.1.1. del artículo 3 del Reglamento SEIA, esta Dirección Ejecutiva estima apropiado incorporar las siguientes **prevenciones** en relación con este literal:

- a) En armonía con lo señalado previamente en este Informe, se hace presente que el pronunciamiento de no ingreso al SEIA del Proyecto en virtud de la tipología establecida en el literal g.1.1 del artículo 3 del RSEIA tiene un **carácter preliminar**, lo que se sustenta en la interpretación que hace este Servicio acerca de la ilegalidad del Proyecto entendiendo con ello que **no cuenta con la autorización e informes señalados en el artículo 55 de la LGUC**, por una parte, y que no se encuentra en las hipótesis excepcionales contempladas en la aludida disposición legal, por otra.
- b) Adicionalmente, es menester señalar que el pronunciamiento de no ingreso al SEIA del Proyecto en virtud de la tipología establecida en el literal g.1.1 del artículo 3 del RSEIA, **en ningún caso supone una autorización para su ejecución**. En efecto, este pronunciamiento se enmarca en el ejercicio de las competencias que detenta el Servicio, las cuales se circunscriben exclusivamente a una esfera ambiental. En este sentido, corresponderá al Titular obtener las autorizaciones, informes previos favorables y/o permisos necesarios para acreditar la conformidad del Proyecto con la normativa urbanística.
- c) Por otra parte, cabe hacer presente que el Ministerio de Agricultura, mediante el Ord. N° 637, de fecha 12 de julio de 2022²⁶, ha señalado que es un hecho de pública notoriedad que en el último tiempo se ha suscitado un explosivo desarrollo de proyectos inmobiliarios en el área rural el que, en gran medida, se ha verificado a partir de subdivisiones prediales practicadas al amparo del Decreto Ley N° 3.516, con infracción de la prohibición de cambiar su destino en los términos que establecen los artículos 55 y 56 de la LGUC, a la que quedan legalmente sujetos los predios resultantes de tales subdivisiones. Dichas limitaciones a la construcción de viviendas han sido ratificadas expresamente en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República²⁷ y la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema²⁸.
- d) Asimismo, el Ministerio de Agricultura agregó que *“parte de la industria y los desarrolladores inmobiliarios han ajustado sus proyectos para vulnerar el espíritu del citado decreto al lotear terrenos rurales simulando que continúan teniendo fines*

²⁶ Se hace presente que, por resolución emanada del 7° Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-11.409-2022, procedimiento ordinario sobre nulidad de derecho público, se decretó la medida precautoria de suspensión de los actos administrativos consistentes en el Oficio Ordinario N° 637, de 12 de julio de 2022, del Ministerio de Agricultura, y la Circular N° 475, de 18 de julio de 2022, del SAG.

²⁷ En este sentido, dictámenes N° 17018, de 29 de abril de 2003; N° 13529, de 29 de marzo de 2008; N° 22086, de 22 de marzo de 2016, entre otros.

²⁸ Así lo ha confirmado, por lo demás, la jurisprudencia judicial. En efecto, mediante sentencia Rol N° 3640 – 2022, de 18 de abril de 2022, la Excma. Corte Suprema confirmó la sentencia Rol N° 12582 – 2021, de 14 de enero de 2021, dictada por la Itma. Corte de Apelaciones de Rancagua, en la cual se sostuvo:

“5°.- *Que, en cuanto a la arbitrariedad reclamada, cabe precisar que la recurrida ha señalado que la suspensión del procedimiento de subdivisión predial iniciado por la recurrente, se basa en la existencia de diversas denuncias formuladas por agrupaciones de la sociedad civil, en las que se da cuenta que la referida subdivisión tendría por objeto la creación de núcleos habitacionales, precisándose en la resolución impugnada que debido a lo anterior, con fecha 10 de junio de 2021, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo denunció estos hechos ante el Juzgado de Policía Local de Chimbarongo, por infracción a los artículos 1 a 3 del Decreto Ley 3.516, proceso que se encuentra en actual tramitación bajo el rol 249.372-2021, todo lo cual permite concluir que el acto impugnado se encuentra debidamente fundado.*

6°.- *Que, asimismo, cabe precisar que el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone en su inciso segundo: “Corresponderá a la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la Planificación urbana intercomunal.”, norma que, en consecuencia, justifica que dicha autoridad haya formulado la denuncia ante el Juzgado de Policía Local acorde además con lo establecido en el artículo 2 del DL 3.516, con la finalidad de cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, no tengan fines ajenos a la agricultura y no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación intercomunal” (Énfasis añadido).*

agrícolas, ganaderos o forestales, aunque en realidad sus usos finales son de tipo habitacional”.

- e) En este contexto, cabe señalar que si bien el Proyecto se origina al alero del Decreto Ley N° 3.516 y que la problemática que subyace es a la de un proyecto amparado en un estatuto jurídico para predios rústicos, corresponde en realidad a un proyecto con destinación habitacional que vulneraría la normativa urbanística y el artículo 2 del Decreto Ley N° 3.516²⁹, según lo indicó expresamente la propia Seremi Minvu de la Región del Maule³⁰.
- f) En relación con lo anterior, este Servicio estima que el conflicto generado a partir de subdivisiones y urbanizaciones en área rural se origina a partir de dos circunstancias que concurren simultáneamente, cuales son: **(a)** que el proceso de certificación del cumplimiento del Decreto Ley N° 3.516, conforme a lo señalado en el artículo 46 de la Ley N° 18.755 en la actualidad no cumple con velar por la vocación agrícola, ganadera o forestal de los predios rústicos y genera, en sí misma, una potencial amenaza a valores ambientales del territorio; y **(b)** que la falta de una adecuada fiscalización de dicho cuerpo normativo y, en general del cumplimiento del artículo 55 de la LGUC, ha permitido un pronunciado aumento en el desarrollo de proyectos de desarrollo urbano e inmobiliarios o de distinta índole en suelo rural, que vulneran la normativa vigente.
- g) En este orden de consideraciones, cabe señalar que no puede pretenderse trasladar al SEIA la problemática originada a partir del incumplimiento de la normativa sectorial, ya que **dicho instrumento de gestión no es la instancia adecuada o idónea para resolver o solucionar estas irregularidades, y no corresponde que se fuerce el uso del SEIA para suplir carencias o dificultades en el ejercicio de otras funciones públicas por quienes corresponde.** En efecto, resultaría inoficioso evaluar un proyecto que incumple la normativa aplicable y cuya compatibilidad territorial sería cuestionada.
- h) La solución de esta problemática radica, esencialmente, en el actuar de los órganos sectoriales competentes en la materia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 18.755 y el artículo 3 del Decreto Ley N° 3.516, los cuales a través del ejercicio de sus respectivas facultades y atribuciones deben proporcionar herramientas jurídicas y técnicas que contribuyan a prevenir la vulneración del texto y el espíritu de este último cuerpo normativo.
- i) Adicionalmente, a quien corresponda supervigilar el cumplimiento de las disposiciones de la LGUC, debe tener presente lo dispuesto en el artículo 138 de la LGUC, el cual sanciona, **con pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo**, al propietario, loteador o urbanizador que realice cualquiera clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio, tales como ventas, promesas de venta, reservas de sitios, adjudicaciones en lote o constitución de comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones, en contravención a lo dispuesto en el párrafo 4° de la LGUC (“De las obligaciones del urbanizador”).

4. CONCLUSIÓN

En definitiva, de los antecedentes tenidos a la vista y el análisis anteriormente efectuado, cabe concluir que el proyecto “Valles de Rauco” no configura la tipología

²⁹ Esta norma dispone expresamente: “*Quienes infringieren lo dispuesto en el presente decreto ley, aun bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines urbanos o habitacionales de los predios señalados en el artículo primero, serán sancionados con una multa a beneficio fiscal, equivalente al 200% del avalúo del predio dividido, vigente al momento de pagarse la multa. Las multas serán aplicables de acuerdo con las normas del Capítulo IV del Título I de la Ley General de Urbanismo y Construcciones*”.

³⁰ En efecto, en el Informe N° 73 de la Seremi Minvu de la Región del Maule, se concluyó: “*De igual manera, dado su carácter habitacional y urbano, **constituye una infracción a lo establecido en el artículo 2 del DL 3.516 de 1980**, que prohíbe la destinación de los predios resultantes de una división rural a fines urbanos o habitacionales.*” (Énfasis añadido)

establecida en el literal g.1.1 del artículo 3 del Reglamento del SEIA, al no contemplar por sí mismo la construcción de viviendas, de acuerdo con lo expuesto en el presente pronunciamiento, **sin perjuicio de las prevenciones realizadas por esta Dirección Ejecutiva en la sección 3.1 de este Informe**, en las cuales se indica que el Proyecto no se encontraría en las hipótesis de excepción que permiten efectuar subdivisiones en áreas rurales en conformidad con el artículo 55 LGUC por lo que resultaría del todo inoficioso someterlo al SEIA en circunstancias que la compatibilidad territorial del mismo sería cuestionada. Dichas prevenciones señalan, además, que esta conclusión de “no ingreso” en ningún caso viene a regularizar su situación, sino que tan solo traslada la discusión a la esfera de la competencia sectorial urbanística, de manera tal que sea en esa sede donde, en forma previa a un análisis ambiental, las autoridades sectoriales discutan y determinen la legalidad del emplazamiento de este proyecto.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

**JUAN CRISTÓBAL MOSCOSO FARIÁS
DIRECTOR EJECUTIVO (S)
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**

GRC/TSN/MCM/JLV/aep

Distribución

- Sr. Emanuel Ibarra Soto, Fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente.

C.c.:

- Dirección Regional, SEA Maule.
- Representante legal de Inmobiliaria Los Alarces SpA. Correo electrónico: machuca@estudioslegales.cl.
- Representante judicial de denunciante. Correo electrónico: mgonzal@derecho.uchile.cl.

Adj:

- Ord. N° 0083, de 22 de febrero de 2022, de la División de Desarrollo Urbano del Minvu.



Firmado por: Juan
Cristóbal Moscoso
Fariás
Fecha: 17/05/2023
18:36:32 CLT



ORD N° N° 0083 /

ANT.: Ordinario N° 99102671, de fecha 26 de agosto de 2021, y Ordinario N° 99102930, de fecha 05 de noviembre de 2021, ambos suscritos por don Hernán Brücher Valenzuela, Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.

MAT.: Responde solicitud de aclaración sobre conceptos urbanísticos utilizados en los literales g) y h) del artículo 3 del D.S. N° 40, de fecha 12 de agosto de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el "Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".

SANTIAGO, 22 FEB 2022

DE : JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

A : DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

1. Esta División ha recibido sus presentaciones singularizadas en el Antecedente, mediante las cuales solicita la emisión de un pronunciamiento destinado a confirmar ciertos conceptos urbanísticos, y su marco regulatorio, con el objeto de tener claridad sobre qué proyectos y/o actividades deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por ajustarse a las tipologías descritas en los literales g) y h) del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), aprobado por D.S. N° 40, de fecha 12 de agosto de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente.
2. Señala en sus presentaciones que, en el último tiempo, se ha visto un aumento considerable de proyectos que consisten en una subdivisión de terrenos, ubicados en área rural, donde se realizan ciertas obras de urbanización, con el objeto de vender posteriormente estos lotes a terceros, en los cuales es posible que se construyan viviendas.
3. En tal contexto, en particular, solicita confirmar o rectificar la aplicación de las normas y supuestos que a continuación se detallan:

- i) *"Considerando que los conceptos que tienen definición legal deben ser utilizados en el sentido que han sido contemplados en la norma respectiva, agradeceré confirmar, rectificar o aclarar si:*
- a) *El concepto de urbanización contempla que se desarrollen todas las obras descritas en el artículo 134 de la LGUC copulativamente o bien basta que una de ellas. Es decir, para que un predio se entienda urbanizado basta solo una de estas obras (por ejemplo, solo el pavimento de caminos) o deben de ejecutarse todas ellas.*
 - b) *Lo que distingue a un loteo de terreno de una subdivisión de terreno es que el primero de éstos no contempla urbanización suficiente por lo que requiere una apertura, ensanche o prolongación de vías públicas y su urbanización.*
 - c) *Se entiende por vía pública lo señalado en el artículo 1° del Decreto N° 2190, Reglamento de la Ley General de Caminos. No obstante, no queda claro cuando se está frente a una apertura, ensanche o prolongación.*
- ii) *Los conceptos que no tienen definición legal tales como "edificación" y/o "conjunto de viviendas", deben entenderse en su sentido natural y obvio.*
- iii) *En el caso que, debido a la respuesta de este oficio, nos lleve a concluir que estos proyectos deban ingresar al SEIA, se solicita confirmar si, en el contexto de esa evaluación ambiental, es posible que se otorgue el PAS 160 de forma separado a las obras a las que se refieren el artículo 134 de la LGUC, y no conforme a la vivienda agrícola que se considera posible de construir al tenor del DL 3516".*
4. En cuanto a su solicitud de pronunciamiento, en primer lugar, debemos señalar que, de acuerdo al artículo 4° del D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), al Ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponderá, a través de la División de Desarrollo Urbano, impartir las instrucciones para la aplicación de las disposiciones de dicha ley, y su Ordenanza General- contenida en el D.S. N° 47, de 1992 (OGUC)-, mediante Circulares, las que se mantendrán a disposición de cualquier interesado.
5. En cumplimiento de tal atribución legal, esta División ha emitido sobre la materia expuesta en su presentación diversas Circulares, entre las cuales destacan por su pertinencia, las Circulares Generales Ord N° 0643 de 2009 (**DDU 224**), N° 0332 de 2017 (**DDU 371**), y N° 0012 de 2021 (**DDU 455**), esta última, que informa recapitulativamente sobre múltiples pronunciamientos emitidos por esta División en torno a la aplicación del artículo 55 de la LGUC, evaluándose en ella además la vigencia de las Circulares emitidas al respecto, todas las cuales se encuentran disponibles en la página web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
6. Sin perjuicio de lo anterior, y en cumplimiento del deber de coordinación establecido en los artículos 3° y 5° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuya virtud la Administración del Estado constituye un todo armónico que debe propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones, a continuación, emitiremos una respuesta a las materias

específicas por Ud. consultadas. Previo a ello, realizaremos una referencia general a las disposiciones y procedimientos más relevantes asociados a la materia por Ud. expuesta, consagrados en la normativa de urbanismo y construcciones.

A. Sobre los procesos de subdivisión y loteo de terrenos.

7. En primer lugar, debemos señalar que, de acuerdo al artículo 1.1.2. de la OGUC, la **subdivisión de terrenos** se define como un *"proceso de división del suelo que no requiere la ejecución de obras de urbanización por ser suficientes las existentes, cualquiera sea el número de sitios resultantes"*. Conforme a lo anterior, en este proceso no se ejecutan obras de urbanización ni cesiones de terreno derivadas de esta última acción.
8. Para estos efectos, la normativa de urbanismo y construcciones, entiende que son suficientes las obras de urbanización existentes, cuando el proyecto no contempla la apertura, ensanche o prolongación de vías públicas, y el predio no está afecto a utilidad pública, conforme lo dispone el artículo 2.2.2. de la OGUC¹.
9. Cuando el predio que se desea subdividir, se encuentra afecto a utilidad pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59 de la LGUC², ya no nos encontramos ante una simple subdivisión, por cuanto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.2.4. numeral 3° de la OGUC³, en tal caso, el propietario deberá urbanizar y ceder únicamente, la superficie del predio afecta a utilidad pública, indicada en el citado instrumento, con un máximo del 30% de la superficie de éste.
10. Por su parte, el **loteo de terrenos** es definido en el artículo 1.1.2. de la OGUC, como el *"proceso de división del suelo, cualquiera sea el número de predios resultantes, cuyo proyecto contempla la apertura de nuevas vías públicas, y su correspondiente urbanización"*.

¹ Artículo 2.2.2. de la OGUC dispone: *"La subdivisión del suelo es la gestión que tiene por objeto dividir un predio, sin que el propietario esté obligado a urbanizar, por ser suficientes las obras de urbanización existentes. Para estos efectos, se entiende que son suficientes las obras de urbanización existentes, cuando el proyecto no contempla la apertura, ensanche o prolongación de vías públicas y el predio no está afecto a utilidad pública por el Instrumento de Planificación Territorial"*.

² Artículo 59 de la LGUC dispone: *"Declaranse de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales y planes seccionales destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los situados en el área rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades. Los propietarios de terrenos afectos a declaratoria de utilidad pública podrán solicitar a la municipalidad o a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, según corresponda, que a través de planos de detalle se grafique con exactitud la parte de sus terrenos afecta a utilidad pública cuando el plan intercomunal o comunal no lo haya establecido, debiendo tales planos aprobarse dentro de los seis meses siguientes"*

³ Artículo 2.2.4 de la OGUC: *"El propietario de un predio estará obligado a ejecutar obras de urbanización en los siguientes casos, 3: Cuando se trate de la subdivisión afecta a declaratoria de utilidad pública por el Instrumento de Planificación Territorial y que no contemple aperturas de nuevas vías públicas por iniciativa del propietario; en caso contrario corresponderá a loteo. En tal caso, con anterioridad a que el Director de Obras Municipales autorice la enajenación de los sitios resultantes, el propietario deberá urbanizar y ceder, únicamente, la superficie del predio afecta a utilidad pública indicada en el citado instrumento, con un máximo del 30% de la superficie de éste"*.

11. Conforme a lo anterior, y según lo precisa la Circular **DDU 371**, cuando se aprueba un loteo, existe por definición, la ejecución de obras de urbanización por parte del propietario, estando obligado a ejecutar a su costa, el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y aguas lluvias, y las obras de defensa y servicio del terreno, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.4. N° 1 de la OGUC⁴.
12. La obligación de urbanización, que recae sobre el propietario, en los casos en que así lo dispone la normativa de urbanismo y construcciones, tiene como contrapartida la prohibición para el propietario, loteador o urbanizador, establecida en el artículo 136 de la LGUC⁵, de realizar cualquier acto o contrato, cuya finalidad última sea la transferencia del dominio de los lotes correspondientes, mientras las obras de urbanización no se encuentren ejecutadas y recepcionadas definitivamente por la respectiva Dirección de Obras Municipales, o en su defecto, se encuentren dichas obras de urbanización garantizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la LGUC⁶.
13. En virtud de lo señalado, la división del suelo puede llevarse a cabo a través de un proceso de subdivisión o a través de un loteo, operaciones urbanísticas distinguibles

⁴ Artículo 2.2.4 numeral 1 de la OGUC: *El propietario de un predio estará obligado a ejecutar obras de urbanización en los siguientes casos: 1. Cuando se trata de un loteo, esto es, la división de un predio en nuevos lotes que contempla la apertura de vías públicas. En tales casos el propietario estará obligado a ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y aguas lluvia, y las obras de defensa y de servicio del terreno. Asimismo, la aprobación del loteo estará sujeta a las cesiones gratuitas de terreno dispuestas en el artículo 70 del mismo cuerpo legal y en el artículo 2.2.5. de este mismo Capítulo, las que se perfeccionarán al momento de la recepción definitiva de las obras de urbanización. En caso que el proyecto consulte recepciones parciales, el propietario deberá entregar, al menos, las superficies de cesión en forma proporcional a la superficie de terreno que represente cada una de dichas partes.*

⁵ El Artículo 136, en su inciso primero, dispone *"Mientras en una población, apertura de calles, formación de un nuevo barrio, loteo o subdivisión de un predio, no se hubieren ejecutado todos los trabajos de urbanización que exigen los dos artículos precedentes y la Ordenanza General, no será lícito al propietario, loteador o urbanizador de los terrenos correspondientes, enajenarlos, acordar adjudicaciones en lote, celebrar contratos de compraventa, promesas de venta, reservas de sitios, constituir comunidades o sociedades tendientes a la formación de nuevas poblaciones o celebrar cualquier clase de actos o contratos que tengan por finalidad última o inmediata la transferencia del dominio de dichos terrenos"*.

⁶ El artículo 129 de la LGUC dispone que *"La garantía de urbanización por el monto total de las obras, que exige esta ley para el efecto de autorizar ventas y adjudicaciones de lotes antes de estar ejecutada y recibida la urbanización, podrá consistir indistintamente en valores hipotecarios reajustables u otros garantizados por el Estado, boletas bancarias o pólizas de seguros. Las instituciones bancarias y aseguradoras, que hubieren emitido el respectivo documento de garantía por la urbanización, pagarán los valores garantizados o la parte de ellos que corresponda con el solo mérito del certificado que otorgue el Director de Obras Municipales, en el sentido de que las obras no se han ejecutado, total o parcialmente, y que el plazo correspondiente se encuentra vencido, indicando además, el monto proporcional de la garantía que deba hacerse efectivo. En los loteos que ejecuten los Servicios Regionales o Metropolitano del Sector Vivienda, por sí o a través de terceros, bastará que dichas Instituciones otorguen a la respectiva Municipalidad una carta de resguardo que garantice que las obras de urbanización se ejecutarán conforme a los proyectos aprobados, para que la Dirección de Obras Municipales proceda a la recepción definitiva de las viviendas, locales comerciales y obras de equipamiento comunitario que se encuentren terminadas y ejecutadas conforme a los correspondientes permisos o sus modificaciones. Se señalará en estos casos, en los certificados de recepción, que las obras de urbanización se han garantizado conforme a lo dispuesto en este inciso"*

tanto desde una perspectiva conceptual, como desde la perspectiva de las obligaciones y prohibiciones que en cada caso se derivan para el propietario del predio que se pretende dividir.

B. Sobre las obras de urbanización, a la luz de la normativa de urbanismo y construcciones.

14. En segundo lugar, y en lo que se refiere a las obras de urbanización, debemos señalar que, desde una perspectiva urbanística, el término "**urbanizar**" se encuentra definido en el artículo 1.1.2. de la OGUC, modificado en lo pertinente por el Decreto N° 14 de 2018, como "*ejecutar, ampliar o modificar **cualquiera de las obras** señaladas en el artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en el terreno propio, en el espacio público o en el contemplado con tal destino en el respectivo Instrumento de Planificación Territorial o en un proyecto de loteo, y fuera del terreno propio en los casos del inciso cuarto del artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones*" (El destacado es nuestro).
15. En relación al término "urbanizar", debemos informar que el mencionado Decreto N° 14 de 2018, modificó la OGUC con el objeto de actualizar sus normas a las disposiciones de la ley N° 20.958 sobre Aportes al Espacio Público.

Una de las innovaciones incorporadas por esta ley, dijo relación con la posibilidad de hacer exigible a determinados proyectos, la ejecución de obras de urbanización fuera del terreno propio en que ellos se desarrollan, para lo cual se agregó un nuevo inciso final en el artículo 134 de la LGUC. En virtud de lo anterior, la redacción actual del artículo citado es del siguiente tenor:

"Para urbanizar un terreno, el propietario del mismo deberá ejecutar, a su costa, el pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servicio de terreno.

Las plantaciones y obras de ornato deberán ser aprobadas y recibidas por la Dirección de Obras Municipales respectiva.

La Ordenanza General establecerá los estándares mínimos de obras de urbanización exigibles fuera del terreno propio, cuando se trate de proyectos desvinculados de la vialidad existente, para los efectos de su adecuada inserción urbana, o su conectividad cuando se trate de proyectos en el área rural conforme al artículo 55".

16. Como consecuencia de tal cambio legal, al momento de reglamentar la ley N° 20.958 sobre Aportes al Espacio Público, una de las materias que fue necesario ajustar en la OGUC, fue precisamente el concepto de "urbanizar" definido en su artículo 1.1.2., con el objeto de incorporar expresamente aquellas obras que debían ejecutarse fuera del terreno propio.
17. En tal contexto, la nueva definición del término "urbanizar", agregada por medio del citado Decreto N° 14, distingue entre aquellas obras ejecutadas en el terreno propio, sea en el espacio público o en el contemplado con tal destino en el respectivo

Instrumento de Planificación o en un proyecto de loteo, de aquellas ejecutadas fuera del terreno propio, en los casos del artículo 134 de la LGUC.

18. En cuanto a las obras de urbanización ejecutadas en el terreno propio, debe recordarse que el artículo 2.2.1. de la OGUC -el cual no ha sido modificado-, precisa que, los casos en que corresponde la obligación de urbanizar al interior de un predio por parte de su propietario, son aquellos establecidos en el artículo 2.2.4. de la misma Ordenanza, a saber: a) cuando se trata de un loteo; b) cuando se trate de un proyecto acogido a la ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria cuyo predio esté afecto a utilidad pública por el Instrumento de Planificación Territorial; y c) cuando se trate de una división de un predio afecto a utilidad pública por el Instrumento de Planificación Territorial, todo lo cual resulta conteste con lo consagrado al efecto en el artículo 1.1.2. de la OGUC, respecto a la acción de urbanizar en el terreno propio.
19. En relación con lo anterior, debe también tenerse presente que, de acuerdo a lo precisado en la Circular **DDU 371**, *"conforme a lo regulado en la normativa de urbanismo y construcciones vigente, el Director de Obras Municipales no está facultado para aprobar permisos de urbanización distintos a los señalados en la normativa aludida, y por ende, tampoco para recibir obras de urbanización que no hayan sido aprobadas en alguno de los permisos asociados a las actuaciones antes mencionadas"*.
20. En consecuencia, de acuerdo al tenor de las normas citadas, la acción de urbanizar comprende la ejecución, ampliación, o modificación de cualquiera de las obras señaladas en el artículo 134 de la LGUC (*pavimento de las calles y pasajes, las plantaciones y obras de ornato, las instalaciones sanitarias y energéticas, con sus obras de alimentación y desagües de aguas servidas y de aguas lluvias, y las obras de defensa y de servicio de terreno*), las cuales podrán realizarse: a) en el terreno propio, en el espacio público o en el contemplado con tal destino en el respectivo instrumento de planificación o en un proyecto de loteo, y b) fuera del terreno propio, en los casos del inciso cuarto del artículo 134 de la LGUC, reglamentado por el artículo 2.2.4. Bis de la OGUC⁷.
21. Por otra parte, de acuerdo al artículo 70 inciso 1° de la LGUC, *"En toda urbanización de terrenos se cederá gratuita y obligatoriamente para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y para equipamiento, las superficies que señale la Ordenanza General, las que no podrán exceder del 44% de la superficie total"*

⁷ El artículo 2.2.4 bis de la OGUC dispone: *"Tratándose de proyectos aprobados en el área rural conforme al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones desvinculados de la vialidad existente, será obligatorio que éstos se conecten con al menos una vía pública. En estos casos los estándares mínimos de las obras de urbanización de la vía de conexión, dentro y/o fuera del predio, será pavimento en tierra debidamente estabilizado y compactado, con una solución para la evacuación de aguas lluvia. La conexión mencionada podrá ser una servidumbre de tránsito. Estos proyectos deberán ejecutar las mitigaciones determinadas por el respectivo Informe de Mitigación de Impacto Vial, en los casos que proceda, conforme al artículo 1.5.1. de esta Ordenanza. En los casos a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 del artículo 2.2.4., cuando se trate de proyectos localizados en el área urbana que estén desvinculados de la vialidad existente, los estándares mínimos de obras de urbanización exigibles fuera del terreno propio, serán la ejecución de las obras de pavimentación frente al predio, referidas al pavimento de la acera y el pavimento de la calzada hasta el eje de la calzada con un máximo de 7 m, de acuerdo a las características de la pavimentación de la vía en la cuadra en que se emplaza. Asimismo, el resto de la vía deberá contar, a lo menos, con pavimento en tierra debidamente estabilizado y compactado, con una solución para la evacuación de aguas lluvia"*.

del terreno original. Si el instrumento de planificación territorial correspondiente contemplare áreas verdes de uso público o fajas de vialidad en el terreno respectivo, las cesiones se materializarán preferentemente en ellas. La municipalidad podrá permutar o enajenar los terrenos recibidos para equipamiento, con el objeto de instalar las obras correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados.”.

22. En razón de lo anterior, la obligación de urbanizar, traerá como obligación correlativa, la obligación de ceder gratuitamente las superficies que señale la OGUC, de acuerdo a las fórmulas de cálculo y porcentajes dispuestos tanto en el artículo 2.2.5. como en el artículo 2.2.4. de tal cuerpo reglamentario.

C. Sobre las actuaciones y construcciones en el área rural.

23. Según se ha precisado por esta División en la Circular **DDU 455**, de acuerdo al artículo 2.1.19. de la OGUC, la división de predios rústicos que se realice de acuerdo al D.L. N°3.516, de 1980, y las subdivisiones, urbanizaciones y edificaciones que autoriza el artículo 55 de la LGUC, se someterán a las reglas que allí se establecen según sea el caso, con lo cual, es dable identificar que las divisiones de predios rústicos y las subdivisiones en el área rural, se rigen por normas distintas, a saber:

- a) División de predios rústicos, de acuerdo a lo dispuesto en el D.L. N° 3.516, de 1980, que Establece Normas sobre División de Predios Rústicos.
- b) Subdivisiones y urbanizaciones acogidas al artículo 55 de la LGUC (inciso tercero).

24. Respecto a la **división de predios rústicos**, esto es los inmuebles de aptitud agrícola, ganadera o forestal, ubicados fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los planes reguladores intercomunales de Santiago y Valparaíso y del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, el artículo 1° del DL N° 3.516 dispone que, éstos podrán ser divididos libremente por sus propietarios, siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 0.5 hectáreas físicas.

El inciso penúltimo del artículo 1° del referido cuerpo normativo, dispone también que, los predios resultantes de una subdivisión, quedarán sujetos a la prohibición de cambiar su destino en los términos que establecen los artículos 55 y 56 de la LGUC. Lo anterior implica que, los predios resultantes, deberán mantener la aptitud agrícola, ganadera o forestal del inmueble.

25. En relación a lo anteriormente señalado, la Contraloría General de la República, precisó, a través de su dictamen N° 29.289 de 2016, que a los predios resultantes de dichas subdivisiones *“les resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 55 de la LGUC, en tanto prohíbe abrir calles, subdividir para formar poblaciones y levantar construcciones, con las excepciones que indica, y permite, bajo los supuestos y autorizaciones que expresa, la subdivisión y urbanización de terrenos para los fines que detalla en su inciso tercero y las construcciones mencionadas en su inciso cuarto”*, a lo cual haremos alusión más adelante.

26. Luego, el artículo 2 del D.L. N° 3.516, de 1980, establece que quienes infringieren lo dispuesto en el mencionado decreto ley, aún bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea la destinación a fines

urbanos habitacionales de los predios señalados en el artículo primero, serán sancionados de conformidad al procedimiento que allí se indica, tramitado ante el respectivo Juzgado de Policía Local. Corresponde la fiscalización del cumplimiento de lo señalado a las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (SEREMI MINVU), a los Servicios Agrícolas y Ganaderos (SAG) que correspondan y a las Municipalidades, según lo establece el artículo 3 del mencionado cuerpo legal.

27. En relación con lo antes indicado, la Contraloría General de la República señaló, en el mismo dictamen citado en el numeral 25 del presente oficio, que las SEREMI de Vivienda y Urbanismo *"no han sido habilitadas por el ordenamiento para intervenir en los procesos de subdivisión de predios rústicos regulados por el decreto ley N° 3.516, cuentan, sin embargo, con atribuciones en los términos expresados en el párrafo que antecede, en cuyo ejercicio pueden efectuar denuncias ante el Juzgado de Policía Local respectivo conforme con lo previsto en el artículo 4° de ese decreto ley y 20, inciso segundo, de la LGUC, precedentemente reseñados"*.
28. Atendido a que esta División no tiene competencias para impartir instrucciones para el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el D.L. N° 3.516, de 1980, y considerando que tanto el SAG como las SEREMI MINVU deben fiscalizar el cumplimiento de sus términos, le informamos que se ha conformado una mesa intersectorial, integrada por el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Servicio Agrícola y Ganadero, Corporación Nacional Forestal y Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de determinar, en el marco de las competencias que cada organismo ejerce en la materia, criterios comunes que permitan identificar la infracción contenida en el mencionado artículo 2 del D.L N° 3.516, de 1980.
29. En cuanto a las **subdivisiones y urbanizaciones acogidas al artículo 55 de la LGUC** esto es, aquellas subdivisiones, urbanizaciones o construcciones con fines ajenos a la agricultura, es dable señalar, en primer lugar, que de acuerdo al inciso 1° de tal disposición, en el área rural rige una regla general prohibitiva, en cuya virtud *"Fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores (...)*.
30. Conforme al citado inciso 1°, fuera de los límites urbanos no está permitido, encontrándose ello también prohibido para los predios rústicos regidos por el D.L. N° 3.516, de 1980, las siguientes acciones:
- a) Apertura de calles: el término calle se encuentra definido en el artículo 1.1.2. de la OGUC como "vía vehicular de cualquier tipo que comunica con otras vías y que comprende tanto las calzadas como las aceras entre dos propiedades privadas o dos espacios de uso público o entre una propiedad privada y un espacio de uso público", mientras que el término "vía" se encuentra definido en el mismo artículo como "espacio destinado a la circulación de vehículos motorizados y no motorizados y/o peatones".
 - b) Subdividir para formar poblaciones: De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "población" -término que no se encuentra definido en la

OGUC-, significa "conjunto de personas que habitan en un determinado lugar", por lo cual, lo que la norma prohíbe, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el inciso 3° del artículo 55 de la LGUC, es subdividir para, o con el objeto de, que un conjunto de personas habite en ese determinado lugar.

- c) Levantar construcciones, en cuyo caso deberá regirse por lo dispuesto en los incisos terceros y cuarto del artículo 55, en donde se regulan las excepciones a esta prohibición.
31. Las excepciones a la regla general antes expuesta, se encuentran en los incisos 3° y 4° del artículo 55 y también en el inciso 3° del artículo 116, ambos de la LGUC.
32. Los incisos 3° y 4° del artículo 55 señalan al efecto:

"Con dicho objeto, cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado, la autorización que otorgue la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura requerirá del informe previo favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este informe señalará el grado de urbanización que deberá tener esa división predial, conforme a lo que establezca la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Igualmente, las construcciones industriales, de infraestructura, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los límites urbanos, requerirán, previamente a la aprobación correspondiente de la Dirección de Obras Municipales, del informe favorable de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan. El mismo informe será exigible a las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado".

33. Por su parte, el inciso 3° del artículo 116 de la LGUC dispone "Las construcciones destinadas a equipamiento de salud, educación, seguridad y culto, cuya carga de ocupación sea inferior a 1.000 personas, se entenderán siempre admitidas cuando se emplacen en el área rural y, en estos casos, para la obtención del permiso de edificación requerirán contar con el informe previo favorable a que se refiere el inciso tercero del artículo 55 de esta ley, el que señalará, además de las condiciones de urbanización, las normas urbanísticas aplicables a la edificación".
34. En todos los casos de excepción regulados en el inciso 3° y 4° del artículo 55 de la LGUC, corresponderá a la SEREMI MINVU respectiva, cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo en referencia. En virtud de lo anterior, un proyecto aun conformándose al tipo descrito en las excepciones dispuestas en el artículo 55 de la LGUC, podría originar un núcleo urbano ajeno a la planificación, caso en el cual la respectiva SEREMI MINVU deberá informar fundadamente tal circunstancia, y en definitiva el proyecto no podrá materializarse.

35. Habiéndose expuesto los principales aspectos de la normativa urbanística asociados a las subdivisiones y loteo de terrenos, obras de urbanización, así como respecto a las actuaciones y construcciones en el área rural, a continuación, nos referimos a las consultas específicas planteadas en su presentación.

D. Consultas formuladas a través del Oficio Ordinario N° 99102671 de fecha 26 de agosto de 2021

a) *El concepto de urbanización contempla que se desarrollen todas las obras descritas en el artículo 134 de la LGUC copulativamente o bien basta que una de ellas. Es decir, para que un predio se entienda urbanizado basta solo una de estas obras (por ejemplo, solo el pavimento de caminos) o deben de ejecutarse todas ellas.*

36. **Respuesta:** De acuerdo al tenor literal del artículo 1.1.2. de la OGUC, el vocablo "urbanizar" para efectos de la aplicación de dicho cuerpo reglamentario, consiste en "ejecutar, ampliar o modificar **cualquiera de las obras señaladas** en el artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en el terreno propio, en el espacio público o en el contemplado con tal destino en el respectivo Instrumento de Planificación Territorial o en un proyecto de loteo, y fuera del terreno propio en los casos del inciso cuarto del artículo 134 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones" (el destacado es nuestro).

Al respecto, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el adjetivo "cualquiera", en su tercera acepción, significa "Uno u otro, sea el que sea". En tal sentido, la concurrencia de una o más de las obras señaladas en el artículo 134 de la LGUC, dependerá del proyecto de urbanización en específico, según la operación urbanística que corresponda, y el lugar o espacio en que dichas obras deban ejecutarse, de acuerdo a lo expuesto en las letras A y B del presente oficio, y bastará que se ejecute cualquiera de ellas para que tengan el carácter de obra de urbanización.

b) *Lo que distingue a un loteo de terreno de una subdivisión de terreno es que el primero de éstos no contempla urbanización suficiente por lo que requiere una apertura, ensanche o prolongación de vías públicas y su urbanización.*

37. **Respuesta:** Efectivamente, en el loteo de terrenos, la división del suelo propuesta por su titular, contempla la apertura de nuevas vías públicas, y su correspondiente urbanización, mientras que, en la subdivisión, la división del suelo que se quiere llevar a cabo, no requiere la ejecución de obras de urbanización por ser suficientes las existentes, cualquiera sea el número de sitios resultantes, todo conforme a las definiciones consagradas en el artículo 1.1.2. de la OGUC y las normas que se han citado en las letras A y B de este oficio.

c) *Se entiende por vía pública lo señalado en el artículo 1° del Decreto N° 2190, Reglamento de la Ley General de Caminos. No obstante, no queda claro cuando se está frente a una apertura, ensanche o prolongación.*

38. **Respuesta:** En primer término, debemos señalar que su consulta se enmarca en lo dispuesto en el artículo 2.2.2. de la OGUC, el cual dispone que "La subdivisión del suelo es la gestión que tiene por objeto dividir un predio, sin que el propietario esté obligado a urbanizar, por ser suficientes las obras de urbanización existentes. Para estos efectos,

se entiende que son suficientes las obras de urbanización existentes, cuando el proyecto no contempla la apertura, ensanche o prolongación de vías públicas y el predio no está afecto a utilidad pública por el Instrumento de Planificación Territorial”.

En tal contexto normativo, debemos indicar que, si bien el término “vía pública” no se encuentra definido en el artículo 1.1.2. de la OGUC, sí es utilizado en diversas disposiciones de la LGUC y su Ordenanza. En primer lugar, el término “vía” se encuentra definido como “*espacio destinado a la circulación de vehículos motorizados y no motorizados y/o peatones*”, por lo tanto, una vía pública será el espacio destinado a la circulación de vehículos motorizados y no motorizados y/o peatones que tiene la calidad de bien nacional de uso público. Ello se infiere de la utilización de tal concepto que hace la OGUC en otros diversos apartados, como por ejemplo artículos 1.4.20. N° 3, 2.2.4. Bis inciso 1°, 2.2.5. N° 2, 2.4.6., 2.6.3. y 2.7.2., entre otros.

Lo anteriormente señalado, se ve confirmado por lo dispuesto en el artículo 135 de la LGUC, el cual regula los efectos que se producen con la recepción definitiva de las obras de urbanización referidas en el artículo 134 del mismo cuerpo legal, al señalar, en lo pertinente que:

“Terminados los trabajos a que se refiere el artículo anterior, o las obras de edificación, en su caso, el propietario y el arquitecto solicitarán su recepción al Director de Obras Municipales. Cuando la Dirección de Obras Municipales acuerde la recepción indicada, se considerarán, por este solo hecho, incorporadas:

- a) **Al dominio nacional de uso público**, todas las calles, avenidas, áreas verdes y espacios públicos en general, contemplados como tales en el proyecto (...).”

Por su parte, en cuanto a la consulta relativa a cuándo se está ante una apertura, ensanche o prolongación de vías públicas, debemos indicar que la apertura de una vía, conforme a la forma en que es utilizado el término en el artículo 56 de la LGUC, y artículos 2.2.2., 3.4.4. de la OGUC, se refiere a la materialización de un nuevo espacio destinado a la circulación, mientras que el “ensanche” debe entenderse como el aumento de la anchura de una vía existente, y la “prolongación” se referirá a la extensión longitudinal de una vialidad también existente.

Tanto el ensanche, como la prolongación de una vía pública, se producirá en la mayoría de los casos, tanto por encontrarse el terreno que se desea dividir, afecto a utilidad pública, de conformidad a lo establecido en el artículo 59 de la LGUC, como por verificarse por tal motivo, alguna de las hipótesis dispuestas en el artículo 2.2.4. de la OGUC, en las cuales un propietario se encuentra obligado a ejecutar obras de urbanización.

En tal sentido, debe tenerse en consideración que de acuerdo al artículo 67 inciso primero de la LGUC, “*Los proyectos de subdivisión, loteos, urbanización o modificación de deslindes de terrenos deberán ajustarse estrictamente a los trazados y normas que consulte el Plan Regulador (...)*, a lo cual, cabe agregar lo indicado en el artículo 2.2.5. inciso 7° de la OGUC, en cuanto a que “*las cesiones deberán materializarse en las áreas declaradas de utilidad pública por el instrumento de planificación territorial respectivo que exista en dicho terrenos y concuerden con el destino de las cesiones, y solo a falta o insuficiencia de éstas, en el resto del terreno*”.

En consecuencia, cuando la división de un predio contemple la generación de nuevas vías públicas, o el aumento de anchura, y/o la extensión de la longitud de una vía existente, dicha operación ya no podrá enmarcarse en el concepto de subdivisión, sino que deberá tramitarse conforme a las normas aplicables a un loteo o subdivisión afecta, según corresponda.

d) Los conceptos que no tienen definición legal, tales como "edificación" y/o "conjunto de viviendas" deben entenderse en su sentido natural y obvio.

39. Respuesta: En relación a la materia en consulta, el artículo 1.1.2. de la OGUC, ubicado en el Título 1 "Disposiciones Generales", Capítulo 1 "Normas de Competencia y Definiciones", dispone que *"los siguientes vocablos tienen en esta Ordenanza el significado que se expresa"*. En virtud de lo anterior, para aplicar las disposiciones de la OGUC, deberá atenderse al significado establecido en tal artículo, lo cual resulta concordante con lo señalado en el artículo 20 del Código Civil.

El citado artículo del Código Civil dispone que *"Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal"*.

Junto a lo anterior, debe tenerse en consideración que en el ejercicio interpretativo deberán utilizarse el resto de los elementos tradicionales de hermenéutica legal, contemplados en los artículos 19 a 24 del Código Civil, debiendo considerar que, de acuerdo a los elementos lógico y sistemático, deberá también estarse a la concordancia que debe existir entre las diversas partes de un mismo cuerpo normativo.

En tal sentido, podemos indicar que si bien los términos "edificación" y "conjunto de viviendas", no se encuentran definidos en el artículo 1.1.2. de la OGUC, si lo están los términos "edificio" y "vivienda".

En efecto, "edificio", se encuentra definido como "toda edificación compuesta por uno o más recintos, cualquiera sea su destino". Mientras que "recinto" se define como *"espacio abierto o cerrado destinado a una o varias actividades"*.

Por su parte, "vivienda" se define en el artículo 1.1.2. de la OGUC como *"edificación o unidad destinada al uso habitacional"*, y conforme a la definición que la LGUC, en su artículo 107, establece para los "conjuntos armónicos", entendidos estos en lo pertinente, como "agrupaciones de construcciones", es dable entender que los conjuntos habitacionales corresponden a agrupaciones de construcciones destinadas al uso habitacional.

Junto a lo anterior, por considerarlo esta División relevante para los fines expuestos en su oficio, se hace presente que de acuerdo al criterio fijado por la Contraloría General de la República en el reciente dictamen N° 33.624 de 2020, la aplicación del "principio de realidad", debe orientar la labor interpretativa del Derecho Administrativo y la búsqueda de soluciones que armonicen y uniformen el actuar de las entidades a través de las cuales el Estado ejerce sus funciones.

e) *En el caso que, debido a la respuesta de este oficio, nos lleve a concluir que estos proyectos deban ingresar al SEIA, se solicita confirmar si, en el contexto de esa evaluación ambiental, es posible que se otorgue el PAS 160 de forma separado a las obras a las que se refieren el artículo 134 de la LGUC, y no conforme a la vivienda agrícola que se considera posible de construir al tenor del DL 3516”.*

40. **Respuesta:** En relación a su última consulta, debe precisarse que el artículo 160 del RSEIA, dispone dentro de los Permisos Ambientales Sectoriales Mixtos (PAS), el “permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos”, estableciendo al efecto en sus incisos 1º, 2º y 3º lo siguiente:

“El permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento algún sector rural o habilitar un balneario o campamento turístico o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 Unidades de Fomento que cuenten con los requisitos para obtener un subsidio del Estado, así como para las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones fuera de los límites urbanos, corresponderá a la autorización e informes favorables que se establecen respectivamente en los incisos 3º y 4º del artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1975, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones. Los requisitos para su otorgamiento consisten en no originar nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana y no generar pérdida o degradación del recurso natural suelo”.

De conformidad al artículo antes citado, el PAS 160 corresponde a la autorización e informes favorables que se establecen respectivamente en los incisos 3º y 4º del artículo 55 de la LGUC. Luego, los requisitos ambientales para otorgar el permiso ambiental sectorial para subdividir y urbanizar, o para construcciones en el área rural, **con fines ajenos a la agricultura**, de acuerdo a las excepciones reguladas en los incisos 3º y 4º del artículo 55 de la LGUC, consisten en no generar núcleos urbanos al margen de la planificación territorial y no generar pérdida o degradación del recurso natural suelo.

Ahora bien, en cuanto a lo que en su presentación se denomina “vivienda agrícola que se considera posible de construir al tenor del DL 3516”, esta División entiende que con ello se refiere a la vivienda del propietario del inmueble y sus trabajadores, a que hace mención el artículo 55 inciso primero de la LGUC. Para el caso de la construcción de la vivienda del propietario y sus trabajadores, el artículo 2.1.19. de la OGUC numeral 3º señala que:

“Para las construcciones necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, como asimismo, una vez obtenida la autorización a que se refiere el número anterior, para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener subsidio del Estado, a que alude el inciso primero del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se deberá solicitar el permiso de edificación correspondiente del Director de Obras Municipales, conforme lo exige el artículo 116 del mismo cuerpo legal, acompañando los antecedentes que señala el artículo 5.1.6. de esta Ordenanza. Dicha Autoridad lo concederá previa verificación del cumplimiento de las normas generales de edificación que contempla esta Ordenanza, sin perjuicio del pago de los

derechos municipales que procedan. En caso de anteproyectos, se acompañarán los antecedentes que señala el artículo 5.1.5".

En virtud de las normas antedichas, la edificación de la vivienda del propietario y sus trabajadores admitida en el inciso primero del artículo 55 de la LGUC, no requiere tramitar, previo a la obtención del permiso por parte de la respectiva Dirección de Obras, las autorizaciones y/o informes indicados en los incisos 3º y 4º del mismo artículo, con lo cual, al no requerirse tales autorizaciones, no resultaría aplicable para tales edificaciones el mencionado PAS 160, en la medida que dicha edificación cumpla con lo dispuesto por dicha excepción.

Ahora bien, distinto es el caso de las autorizaciones e informes requeridos por el artículo 55 de la LGUC para los **proyectos de subdivisión y urbanización**, cuyo fin sea la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, o para la construcción de poblaciones de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 4º de la norma en referencia, caso en el cual, al ser ellas construcciones con fines ajenos a la agricultura, que excepcionalmente podrán autorizarse en el área rural, deberán cumplir con los mencionados informes y autorizaciones, lo cual incluye la evaluación realizada por la respectiva Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en cuanto a si tales obras podrían o no constituir un núcleo urbano ajeno a la planificación intercomunal.

En consecuencia, y conforme al tenor de su pregunta, debe aclararse que el inciso primero del artículo 55 de la LGUC admite fuera de los límites urbanos las construcciones que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, pero prohíbe subdividir para formar poblaciones, esto es, para que un conjunto de personas habite en el lotes resultantes de la subdivisión, salvo que el proyecto se acoja a las excepciones consagradas en el inciso tercero del artículo 55 de la LGUC, en cuyo caso se podrá subdividir y urbanizar para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales, o de viviendas de un valor de 1.000 unidades de fomento; o se acoja al inciso cuarto, en cuyo caso, sin mediar división del suelo, se admiten poblaciones. De esta forma, las obras a las que se refiere el artículo 134 de la LGUC, con fines ajenos a la agricultura, sólo pueden ejecutarse en el área rural, dentro de las excepciones consagradas en el artículo 55 inciso tercero.

Saluda atentamente a usted,



ENRIQUE MATUSCHKA AYÇAGUER
Jefe División de Desarrollo Urbano



DDU/MICH/PMS/MFGC

DISTRIBUCIÓN:

1. Destinatario.
2. Depto. Planificación y Normas D.D.U.
3. Oficina de Partes D.D.U.